



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado

Referencia: Verbal
Demandante: DIANA CRISTINA RUIZ RODRÍGUEZ
Demandado: JUAN CARLOS TABORDA PALACIO Y/OS
Decisión: Revoca auto
Radicado: 05001 31 03 014 2022 00351 01
Auto Nro: 033

DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
TRIBUNAL SUPERIOR
SALA UNITARIA DE DECISIÓN

Medellín, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte demandante, contra la providencia emitida el 2 de diciembre 2022 por el JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN, mediante la cual se RECHAZA LA DEMANDA.

ANTECEDENTES:

Por intermedio de apoderado judicial idóneo, la señora Diana Cristina Ruiz Rodríguez promovió demanda de declaración, disolución y liquidación de sociedad de hecho en contra de JUAN CARLOS TABORDA PALACIO, cuyo conocimiento correspondió al JUZGADO CATORCE CIVIL DEL CIRCUITO DE ORALIDAD DE MEDELLÍN.

Como pretensión principal se solicitó, que se declare la existencia de una sociedad comercial de hecho entre las partes, correspondiéndole a cada uno el 20% y su posterior liquidación. Al realizar el estudio de admisibilidad de la demanda, el Juez de primera instancia inadmitió la misma por auto del 16 de marzo de 2022, a fin de que en el

término de cinco días la parte demandante subsanara los siguientes requisitos:

- 1. Deberá determinar bien la solicitud de inscripción de la demanda en el establecimiento de comercio "el mirador del Yeyo" indicando el número de matrícula mercantil, asimismo, adecuará las demás solicitudes de embargo, encausándolas en las establecidas en el artículo 590 del C.G.P.*
- 2. La parte actora deberá prestar caución de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 590 del Código General del Proceso; lo anterior de conformidad con el artículo 90 numeral 7 C.G.P., en el entendido que renuncia a la facultad prevista en el parágrafo 1° del artículo 590 ídem., sin embargo, para establecer el porcentaje de la caución, deberá determinar el valor de las pretensiones que reclama.*
- 3. Incluirá acápite donde se estime la cuantía del proceso.*
- 4. Deberá discriminar y agrupar las pretensiones, en principales y consecuenciales y las formulará teniendo en cuenta que el proceso que se instauró es de naturaleza liquidatoria.*
- 5. Deberá adecuar el acápite de pruebas –testimoniales, acorde con lo dispuesto en el artículo 212 del C.G.P., enunciando concretamente los hechos objeto de la prueba para cada testigo.*
- 6. Deberá cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la ley 2213 de 2022, indicando en el poder expresamente la dirección de correo electrónico del apoderado que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados.*
- 7. Para una mejor comprensión del libelo, deberá presentarse nuevo escrito de demanda que contenga el cumplimiento de los requisitos exigidos."*

Dentro del término concedido, pretendió la parte actora cumplir los requisitos indicados en el auto que inadmitió la demanda. Sin embargo, el despacho de conocimiento en providencia del 2 de diciembre de 2022 rechazó la demanda, decisión frente a la cual se interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Por auto del 14 de febrero hogaño, el Juzgado negó el horizontal y concedió la alzada.

Expone el inconforme que lo pretendido es iniciar un proceso de carácter liquidatorio, sin que se busque el reconocimiento económico

por parte de los demandados ni indemnización alguna; insistió que lo que se pretende es la declaratoria y liquidación de la sociedad de hecho "El Mirador de Yeyo" existente y de la cual se desconoce su valor, razón por la que se solicita el nombramiento de un liquidador; estimó que la sociedad de hecho no es una persona jurídica; señaló que las medidas cautelares de que trata el Art. 590 del C. General del P. son aplicables específicamente para los procesos de carácter declarativo y el presente proceso es de naturaleza liquidatoria, debiéndose aplicar en este caso el Art. 505 del C. de Comercio, pues la demandante es acreedora de los demás asociados, razón por la cual se debe proceder a la liquidación, por lo que tiene el derecho de persecución conforme lo establecido en el Art. 2488 del C. Civil; refirió que no cambia el carácter del proceso liquidatorio por existir una pretensión que sea de carácter declarativo ni que se le apliquen normas de éste; manifestó que debe prevalecer el derecho sustancial en las actuaciones de la administración de justicia en todo decreto de medidas previas, pues lo que se busca con ellas es proteger el menoscabo jurídico o fáctico hasta que haya una decisión en firme. Por lo anterior solicitó se revoque el auto que rechazó la demanda.

Siendo la oportunidad para resolver a ello se procede previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

1. El artículo 11 del C. General del P. reza: *"Al interpretar la ley procesal el juez deberá tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial. Las dudas que surjan en la interpretación de las normas del presente código deberán aclararse mediante la aplicación de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los demás derechos constitucionales fundamentales. El juez se*

abstendrá de exigir y de cumplir formalidades innecesarias”; bajo esta premisa se procederá a resolver.

El Art. 90 ejusdem establece que:

"Mediante auto no susceptible de recursos el juez declarará inadmisibile la demanda solo en los siguientes casos:

- 1. Cuando no reúna los requisitos formales.*
- 2. Cuando no se acompañen los anexos ordenados por la ley.*
- 3. Cuando las pretensiones acumuladas no reúnan los requisitos legales.*
- 4. Cuando el demandante sea incapaz y no actúe por conducto de representante.*
- 5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulación para adelantar el respectivo proceso.*
- 6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario.*
- 7. Cuando no se acredite que se agotó la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.*

En estos casos el juez señalará con precisión los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo. Vencido el término para subsanarla el juez decidirá si la admite o la rechaza."

Por su parte el artículo 82 *ejusdem* establece que la demanda con que se promueva todo proceso deberá reunir los siguientes requisitos:

- "1. La designación del juez a quien se dirija.*
- 2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por sí mismas, los de sus representantes legales. Se deberá indicar el número de identificación del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Tratándose de personas jurídicas o de patrimonios autónomos será el número de identificación tributaria (NIT).*
- 3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso.*
- 4. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad.*

5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

6. La petición de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicación de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte.

7. El juramento estimatorio, cuando sea necesario.

8. Los fundamentos de derecho.

9. La cuantía del proceso, cuando su estimación sea necesaria para determinar la competencia o el trámite.

10. El lugar, la dirección física y electrónica que tengan o estén obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibirán notificaciones personales.

11. Los demás que exija la ley.

Parágrafo primero. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibirán notificaciones, se deberá expresar esa circunstancia."

Parágrafo segundo. Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerirán de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastará que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificación en el mensaje de datos."

2. En el caso que convoca la atención de la Sala, se advierte que la pretensión promovida por la señora DIANA CRISTINA RUIZ RODRIGUEZ en contra de JUAN CARLOS TABORDA PALACIO, SERGIO LEÓN TABORDA PALACIO, MAYRA ALEJANDRA SUAREZ y LUIS FERNANDO VILLADA FLÓREZ, va encaminada a que se declare la existencia de una sociedad de hecho y como consecuencia de ello se disponga la disolución y liquidación de la misma. Para ello en su escrito petitorio la parte demandante solicitó el decreto de la medida de embargo de la cuenta bancaria del demandado Sergio León Taborda Palacio, acorde con lo indicado en el Art. 590 del C. General del P.

En consideración a ello, en el auto que inadmitió la demanda exigió al actor prestar caución como lo establece la norma en cita y sin que

fuera posible establecer un porcentaje, pues en las pretensiones no se determinó el valor de los bienes.

Acorde con lo anterior, resulta indispensable señalar que las normas procesales respecto de los requisitos que debe contener toda demanda son de forma y para ello, si bien se pueden considerar como enunciativos, no puede el Juez de la causa, bajo argumentos sustanciales que en nada impiden la admisión del proceso, rechazar la demanda.

En este sentido se tiene que las medidas cautelares se les ha concebido como actos o instrumentos propios del proceso mediante los cuales el juez está en condiciones de adoptar las actuaciones necesarias, en orden a garantizar la satisfacción de un derecho material, o para su defensa a lo largo del proceso. Tienen entonces, un carácter típicamente instrumental y provisional en cuanto a su vigencia, aunado a su naturaleza jurisdiccional respecto del acto del juez conductor del proceso.

Es así como en el régimen jurídico, las cautelas están concebidas como un instrumento legal que tiene por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado.

Para ello los estatutos procedimentales han establecido en su orden cuáles medidas son procedentes, en qué forma deben realizarse y de

acuerdo al trámite procesal su procedencia y pertinencia. En este sentido se puede asegurar que las mismas se dan anexas o conexas al proceso principal, dependiendo su decreto de requisitos específicos que nada tienen que ver con la admisión de la demanda. El amplio rango de configuración de cautelas previsto en el artículo 590 del CGP hace más imperiosa para el juez la obligación de considerar razonablemente su pertinencia y legalidad, máxime cuando se trata de pretensiones declarativas, las cuales, solo en el evento de ser acogidas, acarrearían la ulterior etapa liquidatoria.

Bajo esta línea argumentativa se tiene que, no podía la juez de la causa rechazar la demanda por la falta de prestación de la caución, requisito necesario para el decreto de las mismas, pues dicho trámite contiene exigencias diferentes, y si bien se requiere que la demanda sea admitida, no puede en el auto inadmisorio pender del cumplimiento propio de las exigencias del Art. 590 ejusdem para que se dé inicio al proceso. De acuerdo con lo anterior, es claro para la Sala de Decisión que, si solo faltaba la caución para dar curso a la cautela pedida, se cumplió con los requerimientos exigidos, debiendo la funcionaria ejercer el control de legalidad respecto de las medidas solicitadas cuando se procediera a la admisión de la demanda.

Ahora, resulta relevante advertir que, si se podría considerar un requisito de la demanda, si para la pretensión solicitada se requiere la conciliación extrajudicial, como lo dispone el artículo 35 de la Ley 640 de 2001 en concordancia con el parágrafo 1 del Art. 590 del C. General del P. Sin embargo, se echa de menos que dicha exigencia se le hubiese realizado al apoderado de la demandante y en estricto sentido, no podría rechazarse la misma sin que previo a ello se hubiese tenido en cuenta tal exigencia. La no constitución de la caución implica para el demandante que reviva el requisito de la

conciliación prejudicial; tal aspecto, habrá de ser valorado en el nuevo examen de admisibilidad de la demanda.

También resulta de relevancia recordar que para el decreto de las medidas contenidas en el literal “c” del artículo citado se debe apreciar la legitimación o interés para actuar, la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida y si lo estimare procedente podría decretar una menos gravosa o diferente a la solicitada.

Colofón de lo expuesto, es claro que no debió rechazarse la demanda pues los requisitos exigidos fueron cumplidos en su integridad, debiendo **REVOCAR** el auto objeto de alzada, ordenando a la Juez verificar conforme al Art. 82 y ss del C. General del Proceso si la demanda satisface los pedimentos allí establecidos diferentes a los ya analizados o es procedente admitir la misma, caso en el cual procederá a ello. Sin costas en esta instancia, pues no se causaron.

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, **LA SALA UNITARIA DE DECISIÓN CIVIL, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN,**

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el auto de fecha y procedencia indicado en la parte motiva de esta providencia, ordenando a la Juez verificar conforme al Art. 82 y ss del C. General del Proceso si la demanda satisface los pedimentos allí establecidos diferentes a los ya analizados o es procedente admitir la misma, caso en el cual procederá a ello.



Al servicio de la Justicia y de la Paz Social

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.

NOTIFÍQUESE

JOSE GILDARDO RAMIREZ GIRALDO

Magistrado